

la Primera Región Militar, se ha dictado sentencia con fecha 18 de julio de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que no dando lugar a la causa de inadmisibilidad de incompetencia de jurisdicción alegada por el Letrado del Estado y estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Guillermo Prieto Agüero contra el acuerdo del Capitán General de la Primera Región Militar de 12 de julio de 1982, ratificado en vía de alzada por el del Ministro de Defensa de 28 de septiembre de 1983, debemos declarar y declaramos que tales actos administrativos no son conformes a derecho y, en consecuencia, los anulamos y, en su lugar, decretamos que el Ministerio de Defensa debe satisfacer al actor la indemnización de 415.000 pesetas con los intereses legales desde el 7 de septiembre de 1985, fecha de presentación de la demanda.

Se condena en costas a la Administración demandada.

Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo, que habrá de interponerse en el plazo de cinco días ante esta Sala, sin perjuicio de los recursos extraordinarios de apelación y revisión en los casos y plazos previstos en los artículos 101 y 102 de la Ley de la Jurisdicción.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 23 de enero de 1987.-P. D., el Director general de Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. Capitán General de la Primera Región Militar.

3846 *ORDEN 713/38029/1987, de 23 de enero, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 18 de octubre de 1986, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Rodríguez Conejero.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes: de una, como demandante, don Francisco Rodríguez Conejero, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra las resoluciones del Ministerio de Defensa, se ha dictado sentencia con fecha 18 de octubre de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Rodríguez Conejero contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de 28 de febrero de 1985 y 8 de noviembre de 1984, por ser la misma conforme a derecho; sin que hagamos expresa condena en costas.

Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido, junto con el expediente, a la oficina de origen para su ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 23 de enero de 1987.-P. D., el Director general de Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando Superior de Personal del Ejército.

3847 *ORDEN 713/38030/1987, de 23 de enero, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 3 de octubre de 1986, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Noriega Vega.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don José Noriega Vega,

quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar, se ha dictado sentencia con fecha 3 de octubre de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Noriega Vega, contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar de fecha 6 de junio de 1984 sobre haber pasivo; sin hacer expresa mención de las costas causadas.

Así, por esta nuestra sentencia firme que se notificará a las partes con indicación de los recursos que en su caso procedan, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, en sus propios términos, la expresada sentencia.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 23 de enero de 1987.-P. D., el Director general de Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. General-Secretario del Consejo Supremo de Justicia Militar.

3848 *ORDEN 713/38031/1987, de 23 de enero, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, dictada con fecha 5 de noviembre de 1986, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Pablo de Santa Ana Cárdenes.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección de la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, entre partes, de una, como demandante, don Pablo de Santa Ana Cárdenes, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resolución del Ministerio de Defensa, se ha dictado sentencia con fecha 5 de noviembre de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos:

Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Pablo de Santa Ana Cárdenes contra resolución del Ministerio de Defensa de 23 de enero de 1985 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 19 de septiembre de 1984 de la Dirección de Personal, anulando dichos actos por no ser conformes al ordenamiento jurídico, declarando el derecho del recurrente a continuar en servicio activo en la Escala de Complemento del Ejército de Tierra hasta alcanzar la edad de retiro, rechazando la causa de inadmisibilidad alegada.

Segundo.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, en sus propios términos, la expresada sentencia.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 23 de enero de 1987.-P. D., el Director general de Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. General-Jefe del Mando Superior de Personal del Ejército.

3849 *ORDEN 713/38032/1987, de 23 de enero, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 20 de junio de 1986, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Mariano Veiga Iglesias.*

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección de la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de una, como demandante, don

Mariano Veiga Iglesias, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 22 de noviembre de 1982 y 8 de febrero de 1983, se ha dictado sentencia con fecha 20 de junio de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Mariano Veiga Iglesias contra el acuerdo de la Dirección de Mutilados de 21 de junio de 1982, ratificado en vía de alzada por el del Ministro de Defensa de 22 de noviembre de 1982, y éste, a su vez, en vía de reposición, por el del mismo órgano de 8 de febrero de 1983, debemos declarar y declaramos que tales actos administrativos no son conformes a derecho y, en consecuencia, los anulamos y, en su lugar, decretamos que el actor tiene derecho a ingresar en el Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria con la calificación de permanente y derechos anexos y condenamos a la Administración a estar y pasar por ello, llevándolo a efecto.

Sin expresa condena en las costas.

Esta resolución es firme y frente a la misma no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de los extraordinarios de apelación y revisión en los casos y plazos previstos en los artículos 101 y 102 de la Ley de la Jurisdicción.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, en sus propios términos, la expresada sentencia.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 23 de enero de 1987.-P. D., el Director general de Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

3850 *ORDEN 713/38033/1987, de 23 de enero, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 11 de noviembre de 1986, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Ana María Pereiro Sordo.*

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, doña Ana María Pereiro Sordo, quien postula por sí misma, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 27 de marzo y 25 de septiembre de 1985, se ha dictado sentencia con fecha 11 de noviembre de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Ana María Pereiro Sordo contra los acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 27 de marzo y 25 de septiembre de 1985, sobre denegación de solicitud de participación en pensión de viudedad; sin costas.

Así, por esta nuestra sentencia firme, que se notificará a las partes con indicación de que contra la misma no cabe recurso alguno, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 23 de enero de 1987.-P. D., el Director general de Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Secretario del Consejo Supremo de Justicia Militar.

3851 *ORDEN 713/38034/1987, de 23 de enero, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 16 de octubre de 1986, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José María Romo Fernández.*

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don José María Romo Fernández, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, se ha dictado sentencia con fecha 16 de octubre de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José María Romo Fernández, con la pretensión de que se le reconozca el empleo de Comandante a los efectos de que el sueldo de éste sea el regulador de su pensión de retiro, en lugar del de Capitán que tiene atribuido, sin perjuicio de que pueda efectuar tal petición ante el Organismo a quien le está legalmente atribuido resolver tal petición; sin condena en las costas de este proceso y desestimando las alegaciones de inadmisibilidad del defensor de la Administración.

Así, por esta nuestra sentencia firme, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, en sus propios términos, la expresada sentencia.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 23 de enero de 1987.-P. D., el Director general de Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General-Secretario del Consejo Supremo de Justicia Militar.

3852 *ORDEN 713/38036/1987, de 23 de enero, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 20 de octubre de 1986 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por sor Isabel Vázquez González.*

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, sor Isabel Vázquez González, quien postula por sí misma, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar de 17 de abril y de 2 de octubre de 1985, se ha dictado sentencia con fecha 20 de octubre de 1986 cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por sor Isabel Vázquez González contra acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 17 de abril y 2 de octubre de 1985, sobre fecha desde lo que su hermano incapacitado, don Francisco Carmelo Vázquez González, tiene derecho a coparticipar en la pensión que percibe como huérfana del Comandante de Infantería de Marina don Francisco Vázquez Reina; sin costas.

Así, por esta nuestra sentencia firme, que se notificará con indicación de los recursos que en su caso procedan, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, en sus propios términos, la expresada sentencia.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 23 de enero de 1987.-P. D., el Director general de Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Secretario del Consejo Supremo de Justicia Militar.